

Mobilización campesina en el posacuerdo

Por: Ana María Restrepo Rodríguez*

Desde la firma del Acuerdo para la terminación del conflicto armado con las FARC-EP, en el teatro Colón (25 de octubre de 2016), la movilización campesina en Colombia —que aumentó su densidad, visibilidad y poder de presión desde el Paro Nacional Agrario de 2013— ha continuado mostrando la consolidación del campesinado como un sujeto político que tiene mucho que aportar a la construcción de la paz territorial y duradera de la que habla el Acuerdo y que, precisamente por la variedad de sus demandas, muestra las múltiples necesidades y propuestas de vida colectiva en el mundo rural colombiano.

Justo un año después de la firma (octubre de 2017), otro Paro Nacional Agrario con importantes acciones de protesta en el Catatumbo, el Urabá antioqueño, el suroccidente colombiano y Bogotá evidenciaba el incumplimiento del Acuerdo de La Habana respecto de los puntos de sustitución de cultivos y reforma rural integral, así como las de-

das del Gobierno en relación con los pactos que dieron fin a movilizaciones anteriores.

Este paro fue convocado por Marcha Patriótica, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (Conpi), la Asociación Nacional

de Zonas de Reserva Campesina (Anzor) y la Mesa Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA), entre otras cosas también para denunciar la alarmante situación de violación a los derechos humanos de los líderes sociales a lo largo y ancho del país.

Posteriormente se unieron los medianos productores (agrupados en dignidades) para sumar a estas inconformidades la incansable denuncia de las afectaciones de los TLC a la producción agropecuaria nacional. Este paro es significativo porque recoge precisamente esa variedad de procesos de organización posteriores al paro del 2013, así mismo reivindica el papel del campesinado en el Acuerdo de Paz y recoge procesos de organización social originados a partir del Acuerdo.

Podría decirse, entonces, que en primer lugar, el paro ha venido repitiéndose desde 2013 como si se tratase de un



Fotografía: Archivo Cinep/PPP



ritual. En este sentido, se trata de uno de los espacios más importantes de articulación nacional de la variedad de demandas del campo y en segundo lugar, que el Acuerdo ha permitido fortalecer la participación del mundo rural en la política nacional que afecta a los territorios y regiones.

Así, además de visibilizar las demandas de siempre: acceso a servicios públicos o infraestructura vial y garantía del derecho a la salud y a la educación en el mundo rural, tanto el Paro Nacional Agrario de 2013 como la firma del Acuerdo le han permitido al movimiento campesino consolidar una participación política particular con demandas sobre temas estructurales y decisiones políticas nacionales.

En términos generales, desde la firma en el teatro Colón se puede hablar de dos tipos de intereses del campesinado representados en sus acciones de protesta: (1) aquellos que tienen que ver directamente con el Acuerdo y (2) los que no tienen que ver con el Acuerdo, pero sufren que en dicha negociación no se pusiera en cuestión el modelo de desarrollo (luchas de medianos productores agrupados en dignidades de todo tipo y protestas contra minería y megaproyectos).

Protestas campesinas y Acuerdo con las Farc-EP

Las primeras acciones de protesta relacionadas con la implementación del Acuerdo de paz, llamaron la atención porque fueron movilizaciones que parecían oponerse a las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) que acogerían a los guerrilleros desmovilizados. En realidad, estas protestas fueron aprovechadas por los campesinos como una oportunidad para hacer visible su territorio, llamar la atención sobre sus necesidades y reclamar condiciones

dignas para esta nueva etapa de la vida de los excombatientes y de las comunidades que acogerían las ZVTN.

Así, el 6 de marzo del 2017, luego de que el Ejército Nacional quemara la maquinaria y las herramientas para la minería artesanal en las veredas Lejanías y Ojos Claros de Remedios (Antioquia) afectando a cerca de 72 familias y arrestara a 14 personas, habitantes de estos lugares y de las veredas Carrizal, Piñal, Panamá Nueve, Altos de Manila, Cañaveral, El Carmen, Puna, Santa Marta, La Cristalina y Tamar Altobloquearon el paso a la ZVTN de Carrizal (Remedios) con el objetivo de protestar por los operativos contra la minería informal adelantados por el Ejército en los municipios de Remedios y Segovia. Los campesinos y pobladores urbano-rurales manifestaron que no se oponían a la ZVTN, pero querían llamar la atención de las autoridades para que cumplieren con el compromiso de buscar alternativas para las comunidades minero-campesinas frente a la regulación de la actividad minera y de concertar dichas alternativas. Además, exigieron que se acabase con la estigmatización de los pequeños mineros (estos han sido vinculados con grupos armados o delincuencia organizada. En algunos medios

“

Desde la firma en el teatro Colón se puede hablar de dos tipos de intereses del campesinado representados en sus acciones de protesta: (1) aquellos que tienen que ver directamente con el Acuerdo y (2) los que no tienen que ver con el Acuerdo, pero sufren que en dicha negociación no se pusiera en cuestión el modelo de desarrollo.

”

de comunicación nacional se afirmó que la maquinaria destruida pertenecía a la guerrilla del ELN). Para ellos, una paz incluyente debe considerar beneficios para los territorios donde se instalan estas zonas veredales y garantizar la inversión regional.

El día anterior (5 de marzo), en Tame, Arauca, campesinos e indígenas bloquearon la ruta Los Libertadores a la altura de Puerto Jordán (uno de los pasos hacia la ZVTN de la vereda Filipinas en Tame) para exigir trabajos de adecuación de la vía Puerto Jordán-Filipinas-Bocas del Ele.

La protesta con mayor difusión ocurrió en la vereda Caño Indio (Tibú, Norte de Santander), no solo por ser la primera, sino, además, porque la comunidad campesina bloqueó el paso a la caravana del Frente 33 de las Farc que se dirigía a la ZVTN. El motivo: en días anteriores hombres armados identificados como autodefensas hicieron presencia en las veredas La 40 y Las Timbas, en

el corregimiento La Gabarra. La comunidad protestaba entonces porque consideraba que no había garantías para la vida de los campesinos en el área de influencia de la Zona Veredal. Con este motivo mantuvieron la movilización hasta que hizo presencia el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego coordinado por Naciones Unidas.

Este tipo de movilizaciones desaparecieron una vez fueron “mejoradas” las condiciones de infraestructura y seguridad tanto dentro de las ZVTN como en las veredas. Valga aclarar que en Remedios y Segovia se realizó un Paro Minero en septiembre y agosto por el mismo motivo mencionado anteriormente, pero ya no relacionado con la protesta a propósito de la ZVTN. Por otra parte, otras acciones de protesta no solo se han mantenido en el tiempo, sino que, además, han consolidado un tipo particular del campesinado como interlocutor fundamental (y no reconocido) en la implementación del Acuerdo.

Se trata de los campesinos cocaleiros que, agrupados en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam), se presentaron ante el país en enero del 2017 e iniciaron movilizaciones en distintas regiones para protestar por la manera como se aceleró la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) cuando aún no se había definido nada del punto 1 (Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral). En marzo estos campesinos protestaron en Tumaco y Barbacoas (Nariño), Anorí (Antioquia) y Balboa (Cauca) para exigir un espacio de diálogo con el Gobierno nacional sobre los procesos de sustitución y así detener las erradicaciones forzadas que ya empezaban con violencia.

En Tumaco, a pesar de que se creó el Consejo Territorial Municipal del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), dando con ello fin a las protestas de marzo,



Marcha por la vida en Tumaco, Nariño, en abril de 2018. Fotografía: Archivo Cinep/PPP

continuaron, durante todo el 2017, las movilizaciones debido a los incumplimientos del Gobierno relacionados con la no implementación de alternativas de producción y el incremento de la violencia relacionadas con las erradicaciones. No hay que olvidar la masacre de 7 campesinos, el 5 de octubre, sobre la que aún se investiga a la fuerza pública. Respecto a este hecho, la Coccam había denunciado incansablemente la violencia de las erradicaciones por parte del Ejército en Guaviare, Meta, Caquetá, Norte de Santander, Cauca y Nariño.

Es importante señalar que las luchas cocaleras tienen una larga tradición en el país. Sus demandas siempre han sido las mismas: que se definan los planes de erradicación con las comunidades, que no se criminalice a estos productores y que se ofrezcan alternativas de producción que garanticen su subsistencia.

Lo que no entró en el Acuerdo

Como se ha insistido desde el equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP, hay una agenda social que no pasó por La Habana. Parte de esa agenda no cabía en la negociación, pero otra sí pudo haber sido integrada si se hubiese discutido el modelo de desarrollo.

En primer lugar, por estos días es inevitable hacer referencia a las fallas de construcción de la represa Hidroituango. Sobre todo porque más allá de la denuncia de intervención humana en la naturaleza, con la modificación de los cursos naturales de los ríos, la comunidad batalló por el reconocimiento de los afectados a causa de la obra río arriba y río abajo. La actual posibilidad de una gran tragedia está relacionada con la negación pendiente por parte de la empresa sobre esta demanda, ya que esto habría requerido la reubicación de las comunidades que ahora están siendo reubicadas improvisadamente.

Además de las constantes movilizaciones contra la represa El Quimbo, que han unido a habitantes rurales y urbanos, otras protestas siguen surgiendo ante el temor de nuevos proyectos de represas e hidroeléctricas. Así, en el mes de noviembre del 2016, comunidades

“

Las organizaciones sociales han percibido el Acuerdo de Paz como una oportunidad para hacer más visibles sus demandas. En el caso de las luchas campesinas, esta oportunidad es, además, una oportunidad para hacer memoria de sus resistencias

”

campesinas e indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta protestaron por el proyecto de construcción de una hidroeléctrica en la Sierra por parte de la empresa Elemental S.A. Ante las protestas, el ministro de Ambiente afirmó que no existía solicitud de licencia ambiental; sin embargo, no negó la existencia del proyecto.

Contra estas intervenciones en el territorio resultado del modelo de desarrollo extractivo, durante este periodo también se manifestaron los campesinos de Jericó (Antioquia), quienes en la actualidad siguen luchando contra la Anglogold Ashanti. En abril del 2017, la comunidad bloqueó el ingreso de los trabajadores a la zona de exploración con el fin de defender su actividad productiva (café, gulupa y aguacate), así como el agua que nace en el corregimiento de Palocabildo. Aunque la empresa asegura que en la etapa de exploración no se generan daños ambientales, ellos ya empezaron a percibir las afectaciones al nacimiento de agua que surte la vereda La Soledad de este municipio por causa de las perforaciones.

Otra manifestación importante frente al modelo de desarrollo se dio en el Paro Arrocero de junio del 2017, cuando cerca de 3000 productores marcharon por las calles de Bogotá para protestar por el incumplimiento de pagos por parte del Ministerio de Agricultura y por la falta de apoyo durante la coyuntura de caída del precio del grano. Los campesinos afirman que desde la firma de los TLC estas situaciones los afectan mucho más, y así lo denunciaron al unirse a ce-
realeros, lecheros y otros productores

durante el Paro Nacional Agrario de octubre, pues la entrada de productos sin aranceles o con menores aranceles ha afectado sus ciclos de producción.

¿Qué nos dice esto de la movilización campesina?

Desde que iniciaron las negociaciones con la guerrilla, las organizaciones sociales han percibido el Acuerdo de Paz como una oportunidad para hacer más visibles sus demandas. En el caso de las luchas campesinas, esta oportunidad es, además, una oportunidad para hacer memoria de sus resistencias y darles un lugar en las discusiones políticas de la coyuntura. Es decir, temas y problemas que han venido denunciando históricamente son centrales en la negociación con las Farc-EP y son estas comunidades las que pueden proponer alternativas reales para la implementación de los puntos del Acuerdo en los territorios. No en vano, en muchos lugares acontece una apropiación activa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la exigencia de participación de las organizaciones campesinas en las Circunscripciones Especiales de Paz.

La articulación de organizaciones de los territorios más afectados por el conflicto con movimientos políticos alternativos y con las llamadas Dignidades de medianos y pequeños productores, en el Paro Nacional Agrario de octubre pasado, muestra que el movimiento campesino se ha convertido en un campo de interacción de múltiples actores rurales dadas sus claras posibilidades de poner en el escenario público nada más ni nada menos que el derecho a la vida campesina y su pervivencia como sujeto social.

En un escenario poselectoral de persecución a los líderes sociales, represión a la protesta y negación de los Acuerdos estará en manos de este y de todos los movimientos sociales en el país la defensa de lo ganado en los últimos años, incluso, el derecho a la protesta.

***Ana María Restrepo Rodríguez**

Investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz.